

Concepción, cinco de agosto de dos mil diecinueve.

Visto:

Que doña Alicia Felmer Opitz, abogada procurador fiscal subrogante de Concepción del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, en autos RIT O-487-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, recurrió de nulidad en contra de la sentencia de 21 de enero de 2019 que acogió la demanda solo en cuanto constató la existencia de la relación laboral por el periodo que indica, declaró injustificado el despido y condenó a su parte al pago de las prestaciones que indica, más reajustes e intereses, y la rechazó en lo demás, sin costas.

La recurrente solicitó invalidar el fallo fundada en la causal establecida en el artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, en subsidio invocó el motivo de nulidad establecido en el artículo 478 letra b; en subsidio, la causal de nulidad contemplada en el artículo 478 letra c) y aun en subsidio, el motivo de nulidad previsto en el artículo 477, segunda parte, todos del Código del Trabajo, y formuló las peticiones concretas que en cada caso señala.

Se procedió a la vista del recurso en la audiencia del 5 de junio del año en curso, a la que asistieron los abogados de las partes.

**Con lo relacionado y considerando:**

1º.- Que el apoderado de la demandada ha invocado en su recurso como primer motivo de nulidad del fallo el contemplado en el artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, esto es, la incompetencia relativa y absoluta del tribunal y ha pedido que se anule el procedimiento y la sentencia y la remisión de los antecedentes al tribunal civil competente.

Sostiene que se yerra al rechazar la excepción de incompetencia relativa porque el vínculo entre las partes es el contrato a honorarios a suma alzada el que contiene la cláusula de prórroga de competencia que cita y en materia contractual rige el principio “pacta sunt servanda”. El tribunal es relativamente incompetente pues las partes prorrogaron la competencia, así deberá declararse la incompetencia relativa y disponer recurrir ante el tribunal que corresponda.

Respecto de la incompetencia absoluta, señala que la sentencia se ha dictado en un juicio tramitado por un tribunal absolutamente incompetente en razón de la materia. Se alegó la incompetencia por no existir relación laboral entre las partes, no se dan los institutos de empleador y trabajador, propios del contrato de trabajo. La demandante reconoce que prestó servicios bajo “convenio de honorarios a suma alzada”, los servicios no fueron retribuidos por



remuneración mensual, sino que a través de honorarios a suma alzada, divididos en cuotas mensuales contra boleta de honorarios, con deducción de impuestos, previo informe de desempeño.

El tribunal era incompetente por la sola aplicación del artículo 420 letra a) del Código del Trabajo; la contratación de la demandante se ciñó a la Ley de Bases de la Administración en su artículo 15 y las normas estatutarias a las que se refiere, corresponden al Estatuto Administrativo, artículos 1º, 11 los que cita y que regulan la contratación a honorarios para contenidos específicos conforme a las normas generales.

El régimen jurídico especial aplicable a la relación del actor, se encuentra en armonía con el artículo 1º, incisos 2º y 3º del Código del Trabajo y que cita. Al resolver la excepción de incompetencia, resultaba evidente que el tribunal no era competente, pues a los contratados a honorarios no es posible aplicarles el Código del Trabajo cuyas disposiciones se contraponen al régimen del contrato a honorarios y del Código Civil, al cual debe remitirse su regulación por reenvío del Estatuto Administrativo. El demandado es el Fisco de Chile, éste se rige por las normas y principios del derecho público y en particular por el principio de legalidad que rigen los actos de la Administración Pública, según detalla.

En una correcta interpretación del convenio y aplicación de las normas, el tribunal se hubiera declarado incompetente. Era evidente que el factor territorio y materia de la acción, eran ajena a la competencia del tribunal y al no haberse decidido así, deberá acogerse la causal y disponer que se anula el procedimiento y la sentencia, disponiendo la remisión de los antecedentes al tribunal civil competente.

2º.- Que el artículo 478 del Código del Trabajo dispone que el recurso de nulidad procederá, además: “a) Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, ...”.

Los factores o elementos de la competencia en materia laboral están determinados por la materia y el territorio, según lo previsto en los artículos 420, 421, 422 y 423 del Código del Trabajo.

3º.- Que la actora ha deducido demanda en procedimiento de general aplicación para que se declare la existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones en contra de su empleadora, el Fisco de Chile, Subsecretaría de Prevención del Delito y se ha pedido que se declare que la relación de trabajo que hubo entre las partes entre el 9 de junio de 2014 y el 19 de marzo de 2018 fue de naturaleza laboral y que el despido fue



injustificado y nulo, condenándose al demandado a las prestaciones que se indican.

El demandado, contestando la demanda, solicitó su rechazo planteando, en primer término la incompetencia relativa y absoluta del tribunal, invocando al efecto el contrato a honorarios a suma alzada aprobado por decreto de 23 de enero de 2018, cuya cláusula trigésima tercera contiene un prórroga de competencia para ante los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Santiago y porque tratándose de este clase de contratos, las cuestiones a que dé lugar él, solo puede pronunciarse un juez civil.

También controvertió y negó la existencia de una relación laboral, que existiera despido y que proceda pagar cotizaciones previsionales y seguridad social respecto de la demandante. Sostuvo, además, la inexistencia de la relación laboral por las razones normativas que invoca; improcedencia de la demanda por aplicación de la doctrina del acto propio; la legalidad competencial y presupuestaria en las contrataciones a honorarios del fisco de Chile; justificación suficiente del término de la vinculación a honorarios de la demandante; que, en todo caso, la comunicación de no renovación de la prestación de servicios a honorarios de la demandante no obedeció a un despido como señala en el libelo; en subsidio, la improcedencia de la acción de nulidad de despido; en subsidio, enriquecimiento sin causa y, finalmente, la improcedencia legal de las prestaciones pecuniarias demandadas.

La sentencia impugnada, a su vez, decidió acoger la demanda solo en cuanto, constatándose la existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo que va entre el 9 de junio de 2014 y el 19 de marzo de 2018, declaró injustificado el despido que afectó a la trabajadora y condenó al pago de ciertas sumas de dinero por concepto de indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, por años de servicios, 50% de recargo legal sobre dicha indemnización, feriado legal y proporcional; más reajustes e intereses y a enterar en las instituciones respectivas, las cotizaciones previsionales, salud y seguridad social por el periodo ya señalado y rechazó en lo demás la demanda, sin costas.

4º.- Que el factor “materia” determinante de la competencia absoluta del tribunal y que la recurrente estima no concurre en la especie, consiste en la especial naturaleza del negocio o asunto sometido a la decisión del tribunal. En este caso, conforme al contenido de la pretensión y las peticiones concretas planteadas, se trata de un asunto de naturaleza laboral pues se invocan y se han



acreditado los elementos propios de una relación de ese mismo carácter, según se ha establecido en la sentencia recurrida; de modo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, se ha resuelto la contienda entre las partes. En efecto, dicha norma manda “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

No obsta a la conclusión anterior, las excepciones y defensas planteadas por el demandado, pues ellas se relacionan con el fondo de la acción deducida, pero ese solo carácter, no priva de competencia al tribunal, por cuanto es precisamente el llamado a resolver la contienda con motivo de la pretensión intentada.

5°.- Que en cuanto a la incompetencia relativa invocada por el recurrente, el solo hecho que el contrato suscrito por las partes contenga una cláusula de prórroga de la competencia para ante los tribunales ordinarios de Santiago, establecido el hecho que la situación regulada por el mismo corresponde a una relación de naturaleza laboral, el motivo de nulidad sustentado en la incompetencia relativa invocada conforme a ella, no puede prosperar toda vez que solo procede la prórroga de competencia entre tribunales ordinarios de igual jerarquía y respecto de negocios contenciosos civiles (art. 182 Código Orgánico de Tribunales), situación que no ocurre en la especie, pues el Juzgado del Trabajo pertenece al Poder Judicial, pero no es parte de los tribunales ordinarios del mismo, ni se trata de un asunto contencioso civil; por lo que el primer motivo de nulidad no puede prosperar.

6°.- Que para los efectos procesales del caso, se deja constancia que rechazada en su oportunidad la excepción de incompetencia, la recurrente -a diferencia de lo sostenido por la recurrida en estrados- no ha podido apelar de aquella decisión, pues solo será susceptible de apelación la resolución que acoja las excepciones que indica el artículo 453 N° 1 del Código del Trabajo, entre ellas, la de incompetencia.

7°.- Que, en subsidio, invoca la causal de nulidad establecida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo en relación al artículo 11 del Estatuto Administrativo y 7° del Código del Trabajo y solicita se anule la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda, dejando sin efecto las prestaciones ordenadas realizar, con costas.

Refiere el artículo 456 del Código del Trabajo y expone que la



sentencia carece de razones jurídicas, solo cita las pruebas pero ningún análisis particularizado realiza de ellas, incumpliendo el deber de motivar y argumentar sus decisiones, ni siquiera pronunciamiento o referencia valorativa a la testimonial de la contraria. Para corroborarlo basta leer el motivo undécimo del fallo. Así mal se podría afirmar que se consideró la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso, según las conclusiones, normas legales y motivos del fallo que cita. Sostiene que se acreditó que las funciones y servicios de la demandante correspondía a asesorías en proyectos de políticas públicas en materia de seguridad que se ejecutaban en el marco de programas específicos que fueron determinados por la administración, por lo tanto, yerra la sentencia al señalar que no se reúnen los requisitos del artículo 11 del Estatuto Administrativo, pues ello es el resultado de una apreciación de la prueba que se aleja del contenido de las declaraciones de las partes en los convenios y de los dichos de los testigos de la demandante, infringiendo con ello las normas de la sana crítica por falta de razones jurídicas. No se visualizan las razones jurídicas-lógicas que conduzcan paulatinamente a la conclusión.

Sostiene también que la sentencia ha infringido las máximas de la experiencia, cuando omite el análisis lógico de toda la prueba, cuando no analiza la circunstancia que la actora, durante todo el lapso que prestó servicios, emitió boletas de honorarios y que las funciones señaladas en el convenio a honorarios se enmarcan en labores accidentales y para cometidos específicos, servicios que se enmarcan dentro del contexto de asesorías en programas de gobierno. La juez no se hace cargo de lo convenido por las pares, ni de los dichos de los testigos y de la actora en su libelo, quien reconoce que su vínculo es una contratación a honorarios, desatendiendo el mérito de la prueba.

Añade que el fallo infringe el principio de razón suficiente. Al no existir un examen de todos los medios de prueba, no existe ningún elemento que conduzca lógicamente a una conclusión convincente. El fundamento para mutar la naturaleza del vínculo es citar elementos de laboralidad y que emanan de cada uno de los convenios, pero que por el solo hecho de ser coincidentes con algunos de los derechos previstos en el Código del Trabajo, no mutan el vínculo a honorarios que mantuvo la actora con el servicio público. Todos los supuestos elementos de laboralidad no son tales, sino que corresponde a obligaciones y derechos regulados por el Estatuto Administrativo, pero jamás por el Código del Trabajo, inaplicable al caso. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesis.



Sostiene que concluir que por las funciones que se indican en los convenios de honorarios, se está en presencia de un contrato de trabajo regulado por el código del ramo, sin acudir a otro elemento que tienda a hacer veraz tal afirmación, atenta contra las reglas de la razón suficiente.

El fallo de haber aplicado correctamente las reglas de la sana crítica y de haber analizado y ponderado en integridad la prueba, debiera haber concluido que se presentan los presupuestos fácticos del artículo 11 del Estatuto Administrativo y que no se configuran los requisitos del artículo 7° del Código del Trabajo, pues no se acreditó los fundamentos de la demanda, debiendo rechazarla.

8°.- Que el artículo 478 b) del Código del Trabajo dispone que el recurso de nulidad procederá cuando la sentencia haya sido pronunciada con “infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica” en relación al artículo 456 del mismo Código, que dispone: “El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica” y agrega en su inciso segundo: “Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador”.

9°.- Que es insuficiente para fundar esta causal y para que ésta prospere, transcribir el artículo 456 del Código del Trabajo y señalar puramente que el Juez, al valorar los medios de prueba, debe apegarse a las reglas de la sana crítica, no pudiendo contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos y técnicos; pues la exigencia es más profunda. El recurrente en su exposición debe expresar claramente cómo el sentenciador infringió el razonamiento de la lógica, ya que el artículo 456 del Código del Trabajo, al referir que el tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, se remite a la lógica formal, máximas de experiencias y los conocimientos científicamente afianzados; entonces, el razonamiento idóneo para que prospere la causal debe expresar cómo el sentenciador infringe los elementos antes señalados.

10.- Que el razonamiento acerca de la causal, involucra exponer cuál o cuáles leyes de la lógica formal o principios lógicos fueron infringidas en el discurso valorativo utilizado por el Juez para arribar a una conclusión distinta a la por él sustentada y que, en definitiva,



influya en lo dispositivo de la sentencia por caminar justamente en contra de la lógica, lo que permitiría anular la sentencia al alcanzarse a una decisión diferente.

11.- Que el recurrente en rigor solo controvierte fundamentalmente las conclusiones a que ha arribado el tribunal y para ello expone la forma cómo el juez ha acreditado los hechos y cómo, en su concepto, debió valorar las pruebas aportadas; pues, en efecto, únicamente reprocha a la sentenciadora que el fallo carezca de un análisis particularizado de las pruebas rendidas, especialmente la prueba testimonial, sin embargo, en el motivo undécimo del fallo, relativo a las funciones de la actora, conforme al tenor de los contratos suscritos por las partes y los dichos de sus testigos, establece que tales funciones consistían en las que detalla en el mismo considerando, para posteriormente concluir, por las razones expresadas en los fundamentos décimo a decimotercero de la sentencia impugnada -sin contradecir entonces el principios de la lógica- que la naturaleza de la relación contractual que surgió entre las partes es de carácter laboral, al cumplirse los requisitos que contempla el artículo 7° en relación al artículo 8° del Código del Trabajo y, por consiguiente, no se circunscribe en la hipótesis del artículo 11 de la ley N° 18.834; de manera que no existe vulneración a las reglas de valoración de la prueba. Más aún cuando la causal exige que la infracción a las normas sobre la apreciación de la prueba sea manifiesta, es decir, de manera descubierta, patente, clara; lo que no ha sucedido en la especie, pues no hay prueba idónea que permita resolver en un sentido diverso al que se ha hecho, según se indica en los motivos ya consignados del fallo recurrido y, por otra parte, el juez al valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, tiene la facultad de escoger, jerarquizar y ponderar los medios de prueba en tanto fundamente esta decisión, acorde lo prescrito en el citado artículo 456, toda vez que el tribunal “tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice”.

12.- Que la apreciación y convicción consignada en la sentencia, como se ha reiterado por la doctrina y la jurisprudencia, es una facultad soberana del juez, por los que las alegaciones efectuadas por la recurrente resultan más propias de un recurso de apelación que uno de nulidad, lo que se corrobora con sus argumentos relativos a que “Ciertamente, no ha existido ningún examen íntegro, lógico y completo de la prueba documental que por una parte acredita que el vínculo fue civil y no laboral, y por otra, acredita que los servicios de



la demandante correspondían a materias transitorias vinculadas a políticas públicas de gobierno”.

A más de lo anterior, de la sola lectura de la sentencia y de la secuencia lógica de sus considerandos, resulta que ésta cumple con las exigencias establecidas en el artículo 456 del Código del Trabajo, puesto que considera los medios de prueba aportados, explicando las razones jurídicas en que funda su convicción y la decisión de acoger la demanda en la forma que lo ha hecho.

13.- Que en subsidio, la recurrente plantea el motivo de nulidad contemplado en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, solicita que se anule el fallo y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda, decidiendo que la regulación aplicable son las normas del cuanto de acuerdo al artículo 11 inciso final del Estatuto Administrativo, sin que le sean aplicables las normas del Código del Trabajo, con costas.

El fallo incurre en una errada calificación jurídica de los hechos en el motivo décimo tercero que cita, el que, en síntesis, concluye que correspondería aplicar las normas del Código del Trabajo y no las del contrato civil de prestación de servicios, estatuto consagrado en el inciso tercero del artículo 11 de la ley N° 18.834 que excluye la regulación de dichos servicios del referido Estatuto, pero que tampoco hace aplicable el Código del Trabajo. El fallo efectúa una calificación distinta a la aportada por las partes y desconoce la autonomía de la voluntad expresada en el contrato, suscrito en el marco de programas de políticas públicas de gobierno, políticas temporales y no permanentes.

La sentencia efectúa una errónea calificación jurídica de los hechos al catalogar que entre las partes hubo relación laboral y que la actora fue objeto de un despido injustificado, pues no se dan los elementos para clasificar la situación como relación laboral terminada por despido. Es efectivo que ella cuenta con jornada de trabajo de 44 horas semanales, cumplida bajo las mismas condiciones del servicio general, con control y registro de asistencia y sometida a jerarquía (motivo décimo tercero), pero esos elementos no pueden confundirse con indicios de laboralidad, porque los derechos extendidos por mera liberalidad por el contrato no corresponde a derechos del Código del Trabajo, ni permiten mutar la naturaleza del contrato. Cita jurisprudencia.

La ley laboral es inaplicable para la administración, un contrato de esa naturaleza sería nulo. La ley no permite celebrar ese tipo de contratos y en derecho público solo se puede hacer lo que la ley





permite.

Ninguno de los supuestos indicios de laboralidad señalados en el fallo, hace aplicable el artículo 7° del Código del Trabajo, porque ellos pueden pactarse en un contrato de prestación de servicios a honorarios en uso de la autonomía de la voluntad de las partes a cuyas reglas se remite el artículo 11 de la ley N° 18.834, según explicita.

Sostiene que de haber calificado las actividades del demandante como en derecho corresponde, debió entender que el vínculo corresponde al arrendamiento de servicios personales que contempla el derecho común, sin desconocer lo que prescribe el artículo 11 inciso final del Estatuto Administrativo -el que cita- y que somete la prestación de servicios retribuidas con honorarios al contrato y las margina de las normas estatutarias, porque quienes las ejecutan no adquieren la calidad de funcionarios públicos, tampoco trabajadores regidos por el Código del Trabajo. La juez de haber calificado la relación conforme al convenio habría concluido que no es aplicable el Código del Trabajo y habría desestimado la demanda.

14.- Que son hechos de la causa relativos al recurso intentado que constan en la sentencia recurrida, los siguientes: a) la demandante prestó servicios para la demandada -Fisco de Chile. Subsecretaría de Prevención del delito- como Asesora Técnica de la Coordinación Regional de Seguridad Pública, desde el 9 de junio de 2014 hasta el 19 de marzo de 2018 en virtud de diversos contratos de honorarios; b) que las funciones de la actora, consistían en una pluralidad de actividades de asistencia, asesoría, apoyo, cooperación y reemplazo que se detallan en el motivo undécimo de la sentencia impugnada. Asimismo, se indica que la persona contratada tendrá “la calidad de Agente Público”, responsable por los bienes institucionales y recursos públicos que tenga a su cargo y, “en general, ejercer las responsabilidades que le asigne su jefatura”; asignándosele una jornada de trabajo de 44 horas semanales, debiendo cumplirla en las mismas condiciones que los funcionarios públicos de dicha Subsecretaría; en los contratos también se contemplan descuentos de remuneraciones por incumplimiento de jornada, permisos, 15 días hábiles de descanso, capacitación y la posibilidad que la Subsecretaría disponga el traslado de la funcionaria a otra localidad para la prestación de sus servicios, dentro o fuera del territorio nacional; c) que las labores de la demandante no fueron de carácter accidental, sino que habitual en el servicio, funciones propias y habituales del ente gubernamental, observándose manifestaciones del vínculo de subordinación y dependencia y que se detallan (motivo decimotercero); y d) que la actora percibió una suma mensual e igual



durante todo el año (fundamento decimotercero).

15.- Que este motivo de nulidad de la sentencia se funda en lo dispuesto en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, “Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”.

En esta causal de nulidad, por expresa disposición de la ley, debe respetarse los hechos establecidos en la sentencia recurrida, pues esta causal constituye únicamente un cuestionamiento al juzgamiento o calificación jurídica de los hechos establecidos en el proceso.

Acerca de ella, el recurrente sostiene que existe un error al calificar la relación entre las partes como una de carácter laboral regida por el Código del Trabajo y no por las normas propias del contrato civil de prestación de servicios, estatuto establecido en el artículo 11 de la ley N° 18.834 y en que se efectúa una calificación distinta a la aportada por las partes.

16.- Que, como se indicó, esta causal de nulidad no “modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”. En la especie y a los efectos de calificar la relación entre las partes como pretende la recurrente, esto es, una relación de carácter civil importa alterar la conclusión fáctica consistente en que las labores de la demandante no fueron de carácter accidental, sino que habitual en el servicio público, funciones propias y habituales del ente gubernamental, observándose las manifestaciones del vínculo de subordinación y dependencia que se detallan en el motivo decimotercero de la sentencia impugnada; para, en cambio, concluir que se trataba de “labores accidentales y que no sean las habituales de la institución” o que aquéllas correspondían a “la prestación de servicios para cometidos específicos” como señala la norma contenida en el artículo 11 de la ley N° 18.834; por lo que esta causal de nulidad también será desestimada.

17.- Que aun en subsidio, la recurrente invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo por infracción de los artículos 7°, 1° y 3° en relación con el artículo 420 letra a) todos del Código del Trabajo; al artículo 163 del mismo código; los artículos 1° y 11 del Estatuto Administrativo; y artículos 1° de la ley N° 18834, 15 de la ley N° 18.575 en relación a los artículos 11 y 96 del aludido estatuto, artículos 6° y 7° y 100 de la Constitución Política de la República, artículo 2° de la ley N° 18.575 y artículo 2° de la ley N° 19.880, artículo 4° inciso segundo y artículo 9° inciso tercero del DL N° 1263 y artículo 58 del Código del Trabajo, solicita se invalide el fallo y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes.



Infracción de ley por falsa aplicación del artículo 7° del Código del Trabajo en relación al artículo 8°, 1° del mismo código y 11 del Estatuto Administrativo. La sentencia concluye que la relación es laboral, incurriéndose en falsa aplicación del artículo 7° del Código del Trabajo dado que de haberlo aplicado correctamente se habría concluido que no se dan los elementos para dar por establecida la existencia de un vínculo en los términos de dicho artículo, pues implica prescindir del estatuto por el que se rige el contrato al que deben ceñirse por disposición del artículo 11 del Estatuto Administrativo y en el que es lícito pactar acatar las directrices que es propia de los servicios públicos. Cita jurisprudencia.

La vinculación fue con un órgano de la administración pública, esta vinculación fue de derecho y de orden público, por lo mismo la autoridad no puede hacer algo más allá de lo que esté expresamente permitido y autorizado y si el actor acusa una relación contractual regida por el Código del Trabajo pretende imputar a la Administración un acto que no le está permitido, pues no puede celebrar un contrato de la especie y que obedece a un mínimo criterio constitucional establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución. Cita jurisprudencia en apoyo.

Añade que esta interpretación evidencia una infracción al artículo 1° del Código del Trabajo al ser aplicado indebidamente al caso de autos, toda vez que su inciso segundo expresa que sus normas no se aplicarán a “los funcionarios de la Administración del Estado centralizada o descentralizada, ..., siempre que dichos funcionarios se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial”, cita también su inciso tercero y sostiene que en relación a esta disposición el artículo 420 letra a) que reitera la inaplicabilidad de las normas laborales a los funcionarios de la Administración del Estado.

Los contratos de prestación de servicios a honorarios constituyeron un estatuto especial que rigió las relaciones entre las partes. La circunstancia de prestar servicios en una jornada, recibir instrucciones y obtener una retribución mensual, no generan “per se” una relación laboral e incurre en error de derecho el fallo al aplicar el Código del Trabajo en la forma indicada. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesis.

Infracción de ley por falsa aplicación del artículo 163 del Código del Trabajo que contempla los años de servicios. El requisito para subsumir una hipótesis fáctica a su regulación es un contrato de trabajo concluido por despido, lo que en la especie no hubo, sino que legalmente no podía haberlo, por carecer el servicio de facultades



legales para ello. Tampoco existió ni pudo existir despido; el vínculo entre las partes emana de convenios de honorarios concluyendo el último por el uso de una facultad acordada para ambas partes. La juez decide su aplicación (artículo 163) partiendo de supuestos inexistentes, cuales son la existencia de un contrato de trabajo.

El ámbito de acción involucrado es el derecho público y al conceder dichas indemnizaciones no solo concede una indemnización que la autoridad nunca habría podido otorgar, pues no está facultada sino que fija una condición laboral de mejor estándar que las “a contrata”.

Infracción de ley por no aplicación de los artículos 1° y 11 del Estatuto Administrativo. La Subsecretaría se ciñó a las normas de su estatuto, razón suficiente para rechazar una posible relación laboral entre las partes. Por ende se ha infringido el artículo 11 al no ser aplicado debidamente al caso, toda vez que en su inciso segundo señala que “Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios la prestación de servicios para cometidos específicos conforme a las reglas generales” y el inciso tercero agrega que las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las normas de este estatuto. Es decir, el actor por ley se encuentra sometido a un estatuto especial, por la que es procedente la norma de exclusión del inciso 2° del artículo 1° del Código del Trabajo.

Infracción de los artículos 1° de la ley N° 18.834, 15 de la ley N° 18.575 en relación a los artículos 11 y 96 del aludido estatuto, artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución Política de la República y artículo 2° de la ley N° 18.575 y artículo 2° de la ley N° 19.880, artículo 4° inciso 2° y artículo 9° inciso 3° del DL N° 1.263 y artículo 58 del Código del Trabajo; los que cita.

Expone que conforme a dichas normas las relaciones entre la demandante y la Administración estaban sometidas a normas de orden estatutario. El estatuto aplicable es el artículo 11 de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, que facultó para contratar los servicios bajo la modalidad de honorarios a suma alzada. La actora debía emitir boletas de honorarios e informe de desempeño, lo que fue probado a través de los convenios de honorarios, por lo que no asistía al fisco la obligación de retener y enterar cotización alguna de seguridad social y de salud.

Así con la condena al pago de cotizaciones previsionales, infringe el artículo 96 del Estatuto Administrativo, el fisco estaba impedido de descontar suma alguna de los honorarios sin autorización escrita del funcionario. No existía obligación del fisco de retener y pagar las



cotizaciones. La Contraloría General de la República, señala que los expertos contratados a honorarios, no invisten la calidad de funcionarios públicos y sus derechos y obligaciones son los establecidos en el contrato por lo que es improcedente que el fisco haga pago de cotización alguna; pretender lo contrario lleva aparejada una ilegalidad violentando la supremacía constitucional contemplada en los artículos 6° y 7° de la Constitución en relación al artículo 2° de la ley N 19880, dichas normas establecen que los órganos del estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ellas (para el caso, el artículo 11 del Estatuto Administrativo y demás normas aplicables) y deben desarrollar sus funciones dentro de su competencia, según detalla.

Añade que mientras subsistió la relación bajo honorarios a suma alzada el Fisco, se encontraba fáctica y jurídicamente imposibilitado para cumplir con el artículo 58 del Código del Trabajo, carecía de un título para retener y pagar en las instituciones de seguridad social; cita jurisprudencia en apoyo a su postura.

Señala que el vicio se produce al ordenar la sentencia el entero en las instituciones previsionales las cotizaciones de salud y de seguridad social del actor por el periodo que va entre el 9 de junio de 2014 al 19 de marzo de 2018, a razón de \$1.945.400. Añade que sin perjuicio del carácter constitutivo de la sentencia, solo existiría la obligación de pago de cotizaciones de seguridad social y de salud desde que se encuentre ejecutoriada.

Fundamento de la infracción invocada, refiere el inciso 2° del artículo 11 del Estatuto Administrativo y señala que la expresión “específica” no significa limitación material, sino “elementos que caracterizan o distinguen una especie de otra” de modo que el concepto de ningún modo significa irrepetible o excluyente. Refiere jurisprudencia administrativa y que la norma contempla la posibilidad de contratar a honorarios la prestación de servicios específicos conforme a las reglas generales, lo que significa que tales convenciones pueden recaer en labores diversas, tareas permanentes y habituales, siempre que dichas tareas se hallen especificadas como ocurre con el convenio de la actora donde se detallan las funciones específicas que desarrolló; según indica.

Agrega que si se hubiere aplicado debidamente el artículo 7° del Código del Trabajo, falsamente aplicado, habría concluido que no tenía aplicación al caso y en nada afectaba a la situación del demandante, pues sus derechos y obligaciones estaban regulados por su contrato.



Si la sentencia hubiese aplicado correctamente el artículo 163 del mismo código, habría concluido que no corresponde conceder las indemnizaciones consagradas en normas laborales, las que son contrarias al derecho público y establece así un régimen desigual respecto de los funcionarios públicos en planta o contrata

Si el juez hubiera aplicado en su debido contexto el artículo 1° del estatuto Administrativo, hubiera concluido que no es posible aplicar el Código del Trabajo y si hubiera aplicado correctamente el artículo 11 del mismo estatuto, hubiera concluido que las personas que prestan servicios accidentales o en cometidos específicos sobre la base de honorarios en la Subsecretaría se encuentran afectas a “las reglas del respectivo contrato” en el marco del mismo artículo 11, sin estar sometidas al Estatuto Administrativo y menos aún a la legislación laboral, que sin norma expresa, no se aplica en la Administración Pública y concluye que una correcta aplicación del derecho, habría rechazado la pretensión de la actora. Se ha efectuado una errónea calificación jurídica del contrato ya que se le ha atribuido la naturaleza de un contrato de trabajo en circunstancias que es un contrato civil regido por sus estipulaciones.

18.- Que la causal de nulidad de la sentencia establecida en la segunda parte del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, que “aquella se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, se configura si la ley se ha aplicado a casos no regulados por ella, si no se ha aplicado a los casos específicamente contemplados en ella o si, habiéndose aplicado, no lo ha sido en forma correcta; pero en todas estas hipótesis deben respetarse los hechos establecidos en la sentencia recurrida, pues esta causal constituye únicamente un cuestionamiento al juzgamiento jurídico en que se sustenta el fallo impugnado en cuanto a la elección de la norma aplicable a los hechos asentados en el proceso.

19.- Que la recurrente señala como infringidos los grupos de normas ya referidas, reprochando a propósito de esta misma causal, el hecho que la sentenciadora haya calificado como laboral la relación existente entre las partes desconociendo la facultad de la Administración de contratar la realización de labores determinadas conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley N° 18834.

20.- Que establecidos como hechos en la sentencia impugnada los ya consignados en el motivo 13 precedente, especialmente, los relativos a las funciones de la actora, la forma en que éstas se prestaron, el carácter propio y habitual de las mismas respecto del ente gubernamental, bajo vínculo de subordinación y dependencia, como se



indica en el motivo decimotercero del fallo impugnado; dichos aspectos factuales no pueden ser modificados conforme a la causal de nulidad invocada por el recurrente; pues conforme a la petición concreta formulada en torno a ella, esto es, que se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda, lo verdaderamente pretendido es que se haga una nueva valoración de los elementos de convicción para así obtener la modificación de los hechos acreditados y conforme a ello rechazar la demanda en los términos propuestos, lo que es ajeno a la causal de nulidad establecida en la segunda parte del artículo 477 del Código del Trabajo; por lo que esta causal de nulidad tampoco puede prosperar.

21.- Que sin perjuicio de lo anterior, conforme a la jurisprudencia del Máximo Tribunal, es lo cierto que para casos similares al de autos, esto es, personal contratado a honorarios por la Administración en que este contrato constituye un medio de prestación de servicios a través del que la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual -no habitual, como se ha establecido en autos- y en que se hallen presentes los elementos de una relación laboral, se ha resuelto la aplicación del Código del Trabajo por sobre las disposiciones constitucionales, administrativas y sectoriales que la recurrente estima infringidas, incluso ordenándose el pago de las cotizaciones previsionales y de salud por el periodo trabajado, tal como lo ha ordenado la sentencia impugnada; por lo que no se advierten las infracciones de ley denunciadas en el recurso el que, en consecuencia, no puede prosperar (Así se ha decidido v. gr. 3.679-2019, 29.867-2018, 28.229-2018, 19.175-2018, 14764-2018).

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo previsto en los artículos 474, 477, 481 y 482 del Código del Trabajo, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el apoderado de la demandada en contra de la sentencia definitiva de veintiuno de enero de dos mil diecinueve dictada en autos; la que, en consecuencia, no es nula.

Regístrese, notifíquese, insértese en la carpeta virtual y devuélvase su custodia.

Redactó Camilo Álvarez Órdenes, ministro titular.

**Rol Laboral-Cobranza 148-2019.**





PJQWLYBYXJ



Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Hadolff Gabriel Ascencio M., Camilo Alejandro Alvarez O. y Fiscal Judicial Maria Francisca Duran V. Concepcion, cinco de agosto de dos mil diecinueve.

En Concepcion, a cinco de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

